



AYUNTAMIENTO DE RIBARROJA DEL TURIA

Pz. Ayuntamiento, 9 C.P.: 46190 Tfno.: 96 277 00 62 Fax: 96 277 24 62 C.I.F.: P-4621600-H www.ayto-ribarroja.es

SECRETARÍA

ACTA SESION EXTRAORDINARIA ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO
EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2009

Lugar: Salón de ACTOS DE LA AGENCIA DESARROLLO LOCAL

Fecha: 25 DE FEBRERO DE 2009.

Hora: 14:30

CARÁCTER DE LA SESION: extraordinaria

Asistentes:

ALCALDE-PRESIDENTE

DON FRANCISCO TARAZONA ZARAGOZÁ

CONCEJALES ASISTENTES:

Don SALVADOR SILVESTRE LARREA

Don JAVIER MORENO COLL

Doña MARÍA CRISTINA VÁZQUEZ TARAZONA

Doña MARÍA JOSE RUIZ ESTEBAN

Doña MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ ROMERO.

Don JOSE VICENTE TARAZONA CAMPOS

Doña BEÁTRIZ CÓRCOLES NAVARRO

Don JOSE LUIS FOLGADO CORREA

Doña RAQUEL ARGÁNDOÑA LOPEZ

Don ROBERTO PASCUAL RAGA GADEA

Doña ZAFIRA PEREZ PACHECO

Don JOSE LUIS LÓPEZ GALDON

Doña MARÍA ANGELES ROSA ROMERO

Don JOSE ANGEL HERNÁNDEZ CARRIZOSA.

Doña CARMEN FOLGADO TERESÍ

Concejales/ausentes:

Doña SILVIA GUERRERO CANOVAS

Secretaria

Doña Nieves Barrachina Lemos.

En la villa de Ribarroja de Túria, provincia de Valencia, en el Salón de Actos de La Agencia Desarrollo Local , el día 25 de febrero de 2009, siendo las 14:30 horas, se reunieron en primera convocatoria los señores concejales indicados, habiendo excusado su asistencia los igualmente marginados, Todo ello bajo la Presidencia del Sr. Alcalde don Francisco Tarazona Zaragoza, asistido de la Secretaria doña Nieves Barrachina Lemos.



SECRETARÍA

Declarado abierto el acto por la presidencia, se pasa al estudio y acuerdo de los asuntos consignados en el Orden del Día.

PRIMERO: .- ACUERDO RELATIVO A LA RENUNCIA SOLICITADA POR D^a ZAFIRA PEREZ PACHECO PERTENECIENTE AL PSPV-PSOE.-

Dada cuenta del escrito presentado por la Concejala del PSPV-PSOE, D^a ZAFIRA PEREZ PACHECO, presentado en fecha 2 de febrero de 2009, en el que comunica su decisión de renunciar a su acta de Concejal del PSPV-PSOE del Ayuntamiento de Ribarroja del Turia.

Considerando lo establecido en el art. 9, ap. 4 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre que aprueba el Reglamento de Organización Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) en el que señala las causas por las cuales un concejal pierde su condición, y entre las que se encuentra la renuncia.

Considerando que en dicho supuesto el Pleno del Ayuntamiento debe acordar la aceptación de la renuncia e instar a la Junta Electoral la expedición de credencial al siguiente de la lista.

Considerando que según el artículo 182 de la LOREG, Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de Régimen Electoral General en caso de renuncia el escaño se atribuirá al candidato o en su caso al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación.

El Pleno por unanimidad de todos los miembros asistentes que conforman la mayoría absoluta del número legal de miembros, acuerda:

PRIMERO: Aceptar la renuncia de la Concejala D^a Zafira Pérez Pacheco de la lista del PSPV-PSOE.

SEGUNDO: Solicitar de la Junta Electoral Central la expedición de credencial a favor de DOÑA ANA LUJAN TARIN, siguiente de la lista correspondiente al PSPV-PSOE atendiendo a su orden de colocación, al objeto de tomar posesión en la primera sesión que celebre el pleno una vez remitida por esa Junta la referida credencial.

SEGUNDO.- ACUERDO RELATIVO A LA APROBACION CONVENIO ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE RIBARROJA DEL TURIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SONA LA DIPU, VALENCIA PROVINCIA WIFI" EN EL MARCO DE LA COLABORACION Y COOPERACION PROVINCIAL CON LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA.-



SECRETARÍA

La sociedad de la información, el proceso de modernización de las Administraciones Públicas así como el derecho de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos consagrado y articulado en la Ley 11/2007, de 22 de junio, exigen con fecha de caducidad (31 de diciembre de 2009), que aquellas se doten de los medios y sistemas electrónicos para que esos derechos puedan hacerse efectivos. Ahora bien, el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos y la correlativa obligación de éstas de facilitarlos, devendrá inútil si los poderes públicos no impulsan la instalación, y gestionan el uso, de las infraestructuras indispensables para que los potenciales usuarios – ciudadanos, entidades y empresas - puedan acceder a esos servicios que, por vía telemática, les oferten los operadores privados o las propias Administraciones Públicas.

Poner en manos de los ciudadanos los medios técnicos adecuados que hagan posible y agilicen, sin perjuicio de las actuaciones que a la iniciativa privada le corresponden y que en muchos casos viene ya desarrollando, su acceso a los canales por los que deben transitar para ejercitar sus derechos es, sin duda, una actuación que entra en el ámbito de las capacidades que la legislación asigna a los entes locales. Desde este prisma el suministro, instalación, mantenimiento y explotación de Redes Digitales Municipales basadas en tecnología inalámbrica (Red Digital Municipal, Zonas Digitales Municipales y Edificios Digitales) en los municipios de la provincia hasta formar una verdadera Red Digital Provincial, supone un importante paso adelante.

Es en este contexto donde la Diputación Provincial ejerciendo, sus competencias de cooperación, asistencia y colaboración con los municipios para la utilización interactiva de las tecnologías de la información y comunicación, y en cumplimiento de la Disposición Final Tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios público, planteó el Programa “Sona La Dipu, Valencia Provincia Wifi”, al que se adhirieron inicialmente la mayoría de los municipios de la provincia y, por acuerdo plenario de 21 de enero de 2.009, dio luz verde a las Directrices que regirán la colaboración y cooperación provincial con las entidades locales de la provincia para el desarrollo de dicho Programa y su Convenio regulador.

La Exposición de Motivos de la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 32/2003, de 3 de noviembre) declara que la regulación de las comunicaciones electrónicas se inspirará en mantener el régimen de libre competencia al tiempo que asegura una mínima intervención de la Administración en el sector, para fijar, en su artículo 8.4, las pautas de regulación de la actividad de las Administraciones Públicas, por si o por medio de persona interpuesta, como operadores de redes y servicios de comunicación electrónica. El citado artículo admite expresamente la intervención de las Administración Públicas en el mercado de las telecomunicaciones como un operador más, ya sea de forma directa o indirecta a través de empresas públicas (en su sentido más lato).

Por otra parte, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen local señala en su artículo 25 que, *“el municipio para la gestión de sus intereses y en la esfera de sus competencias puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”*, para añadir en su artículo 85 que *“son servicios públicos locales los que presten las entidades locales en el ámbito de sus competencias”* y, establecer en su artículo 70,bis, apartado tercero, *“los municipios deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas”*.



SECRETARÍA

De lo anterior, fácilmente se deduce el interés municipal y el beneficio que para la comunidad vecinal supone la implantación de servicios que, con vocación de universalidad, suministren desde el punto de vista económico y técnico, el acceso y la normal utilización de los canales tecnológicamente más avanzados. Y ello aún considerando que la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas constituye un “servicio de interés general”, una actividad liberalizada y no un “servicio de titularidad pública” o un “servicio público” en el sentido clásico del término. Evidentemente una Administración Pública, en este caso el Ayuntamiento, directamente o a través de un tercero, pero también coordinadamente con otras Administraciones Públicas y muy especialmente a través de la Diputación (dadas sus competencias en orden a la colaboración, asistencia, coordinación y cooperación con las entidades locales de la provincia), puede intervenir en el mercado de las telecomunicaciones como un agente más, compitiendo con el resto de los operadores en la actividad de establecer y explotar redes o prestar servicios de telecomunicaciones. En este caso, su actividad estará sometida tanto a la normativa sectorial de las telecomunicaciones como al resto de la normativa reguladora de la libre competencia que pueda serle de aplicación a las actividades desarrolladas.

Añadir además que mejorar la cohesión territorial y agilizar la eliminación de los obstáculos que producen deficiencias, cuando no carencias, en infraestructuras de comunicaciones que pueden desembocar en una brecha digital (con la consiguiente quiebra de oportunidades para ciudadanos y entidades y el fomento de desigualdades inaceptables) deben ser objetivos estratégicos de las Administraciones Públicas, y así se proclama, para con la Diputación Provincial de Valencia, en el anteriormente citado acuerdo plenario de 21 de enero de 2.009. Por ello, si la legislación vigente establece, como hace, que la Provincia tiene como fines propios y específicos garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales en el marco de la política económica y social, el gobierno y la administración provincial de forma coordinada con los gobiernos de los entes locales de su territorio, debe fomentar el más completo cumplimiento de estos fines, dotando a los entes locales de la provincia de los adecuados mecanismos de relación electrónicos con los ciudadanos e implantar las infraestructuras de comunicaciones que les permitan, la más eficaz comunicación con las diferentes Administraciones Públicas. El Programa que nos ocupa aborda de lleno estos objetivos estratégicos; objetivos de los que participa plenamente este Ayuntamiento.

El despliegue de Redes Digitales Municipales basadas en tecnología inalámbrica, hasta formar una Red Inalámbrica Provincial, se presenta de este modo, como una de las acciones más potentes en el cumplimiento de los objetivos de cohesión territorial en la provincia y al tiempo, como se ha apuntado, evitar la llamada brecha digital. En este sentido este Ayuntamiento pretende formar parte de la Red Digital Provincial diseñada por la Diputación.

De igual forma, la implementación y desarrollo de una Red Wifi (entendida en su más amplia acepción) en cada uno de los municipios de la provincia, significa asumir dentro de la competencia local una actividad económica que ampara un servicio de interés general - así lo considera el artículo 2 de la Ley General de Telecomunicaciones - aunque de carácter no esencial, entendido como actividad desarrollada por el Ayuntamiento que no impide su realización por empresas privadas, por cuanto las entidades locales, como ya se ha expresado, *“deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos”*.



SECRETARÍA

Pero, además, y en la fase de explotación de las infraestructuras instaladas o que instale quien se constituya en operador gestionando el servicio otorgado por la Administración, supone, en sentido estricto, el ejercicio de una actividad económica por parte de los entes locales que, como ya se ha anticipado, entra plenamente dentro del ámbito de sus capacidades y queda amparada constitucionalmente en los artículos 9 (*“promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que la integran, sea real y efectiva”*) y 128 (que posibilita la intervención de las Administraciones Públicas en concurrencia con la iniciativa privada en la dación de bienes al mercado). Esa actividad se pretende sea ejercida por delegación de los entes locales titulares de la capacidad y competencia, por parte de la Diputación Provincial – una vez aceptada la delegación que le hagan los Ayuntamientos –. La actividad a desarrollar por la corporación provincial lo es, en ejercicio del genérico deber de cooperación, asistencia y colaboración que se asigna a las Diputaciones Provinciales, y el más concreto de colaboración con los municipios que *“por su insuficiente capacidad económica y de gestión no puedan desarrollar en grado suficiente “el impulso de la utilización interactiva de las tecnologías de la información y de la comunicación”* a las que se refiere el artículo 70 bis de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Es en el ejercicio, por la Diputación Provincial, de una actividad soportada en un servicio de interés general por parte de las Administraciones Públicas – en concreto por parte de la Diputación Provincial por delegación de los respectivos Ayuntamientos – donde debe residenciarse la actuación que la provincia pretende llevar a término.

Como ya se ha adelantado, prestar un servicio de comunicaciones electrónicas por parte de las entidades locales (Administraciones Públicas) es plenamente acorde con el ordenamiento jurídico vigente tanto si es promoviendo el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, como la utilización de nuevos servicios y despliegue de redes, el acceso a éstos en condiciones de igualdad, e impulsando la cohesión territorial, económica y social, donde estas no existen o son indiscutiblemente insuficientes, como en los supuestos en los que una concreta entidad pública (en el presente caso una entidad local) decida prestar el servicio en zonas donde ya se está prestando por operadores privados, en concurrencia con estos. En este último caso se estará actuando como un operador más y esta actuación, desde el punto de vista de la Ley General de Telecomunicaciones, devendrá de interés general por venir amparada (artículo 4) por indicadores tales como propiciar el incremento de ofertas, promover la inversión eficiente en nuevas tecnologías, fomentar la innovación tecnológica y en definitiva, impulsar beneficios para los ciudadanos derivados del régimen de libre competencia.

Entendida en la forma reseñada la actividad a desarrollar por los respectivos ayuntamientos (actividad para la prestación de un servicio de interés general) nada les impide que se adhieran al Programa *“Sona la Dipu, Valencia Provincia Wifi”*, y asumir como propio el suministro, puesta en funcionamiento, explotación y mantenimiento de las infraestructuras y servicios mediante Redes Inalámbricas para el acceso de los ciudadanos y entidades municipales a los servicios de la sociedad de la información y, al mismo tiempo delegar el ejercicio de esta actividad, asumida en base a las capacidades que les otorga el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y la propia Ley General de Telecomunicaciones en su artículo 8.4, en la Diputación Provincial.

La delegación municipal (para ofrecer estos servicios de interés general al mercado) tiene perfecto encaje en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Si el artículo 31 del citado texto legal señala *“que son fines propios y específicos de la provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales en el marco de la*



SECRETARÍA

política económica y social y, en particular: a) garantizar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de la competencia provincial”, el artículo 70, bis, apartado tercero, tras afirmar que los “municipios deberán impulsar la utilización interactiva las tecnologías de la información y la comunicación” determina que “las Diputaciones Provinciales colaborarán con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber establecido en este apartado”.

Pero es más, entre las finalidades de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos figura la de “facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información”, y la más genérica de “contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las Administraciones Públicas y de la sociedad en general”, finalidades de muy difícil cumplimiento si no se desarrollan y potencian los cauces para que los ciudadanos puedan acceder de forma cómoda y segura a los servicios que las administraciones locales hayan implementado en desarrollo de los principios establecidos en la legislación vigente.

Entendiendo que, la transferencia de actividades y servicios a otras Administraciones Públicas, la aprobación de la concreta forma de gestión de un servicio público – en este caso la prestación de un “servicio de interés general” que deberá ser ofrecido en el mercado en concurrencia con los demás actores -, la delegación de competencias y su aceptación corresponde al pleno de la entidad local, y que para llevar a término esta transferencia se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación como se infiere de los artículos 22 y 47 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Entendiendo igualmente que, para concretar las obligaciones y derechos que los Ayuntamientos adquieren y soportan con la delegación, y la delegación misma y hacer efectiva la cooperación provincial con los municipios, entre los previstos en el artículo 30,5 del RDL 781/1986, de 18 de abril, el Convenio Administrativo, es el instrumento idóneo.

Vistos los acuerdos provinciales y la documentación que los soporta y en especial las Directrices para la colaboración y cooperación provincial con las entidades locales de la provincia para el desarrollo del programa provincial “Sona La Dipu, Valencia Provincia Wifi”, y el Modelo de Convenio entre la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento para el desarrollo del Proyecto Provincial en el marco de la colaboración y cooperación provincial con las entidades locales de la provincia”.

Vista la propuesta de la Concejala y Técnico del Área de Organización, Sistemas de Información y Comunicaciones y el Informe de la Secretaria del Ayuntamiento de fecha 18 de febrero de 2009 que forman parte del expediente.

El Pleno por unanimidad de todos los miembros asistentes que conforman la mayoría absoluta del número legal de miembros, acuerda:

Primero: Adherirse al Programa Provincial “Sona La Dipu, Valencia Provincia Wifi” en los términos fijados por las Directrices que rigen la colaboración y cooperación provincial con las entidades locales de la provincia para su desarrollo. Asumiendo como propia la competencia para ejecutar las actuaciones necesarias para implementar las acciones en las que se concreta esta colaboración y cooperación provincial del Programa Provincial “Sona



SECRETARÍA

la Dipu, Valencia Provincia Wifi”, y delegando en la Diputación Provincial de Valencia, en el marco de la cooperación y colaboración con los Ayuntamientos de la provincia que le son propios y en los términos previstos en las Directrices Provinciales y el correspondiente Convenio Administrativo, el ejercicio de esta competencia para el suministro, instalación, mantenimiento y explotación de una Red Digital Municipal en basada en tecnología inalámbrica en el municipio y la prestación de la actividad municipal que se asume – prestación de un servicio de interés general -.

Segundo: Aprobar el Convenio Administrativo que, como parte del presente acuerdo, debidamente diligenciado obra en el expediente.

Tercero: Autorizar al Alcalde-Presidente tan ampliamente como en Derecho proceda, para la firma del citado Convenio Administrativo con la Diputación Provincial y de cuantos documentos sean precisos para la efectividad de los derechos y obligaciones que se derivan del presente acuerdo.

Cuarto: La efectividad de derechos y obligaciones que se desprenden de los acuerdos anteriores lo será desde la firma por parte de este Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Valencia del Convenio Administrativo al que se ha hecho referencia.

TERCERO.- ACUERDO RELATIVO A LA RATIFICACION DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN RELACION A LA APROBACION DEL CONVENIO NORMALIZADO DE ADHESION DE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DE ADQUISICION CENTRALIZADO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE COMPRAS DE LA DIPUTACION DE VALENCIA (CENTRAL) QUE SE UNE COMO ANEXO.-

El Sr. Alcalde da lectura a la Moción que dice lo siguiente:

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de febrero de 2009 relativo a la aprobación del Convenio normalizado de adhesión del Ayuntamiento de Ribarroja del Turia al sistema de adquisición centralizado de la Excm. Diputación Provincial de Valencia, Central de Compras de la Diputación de Valencia (Central) remitido por la Diputación Provincial de Valencia, se somete al Pleno de la Corporación la ratificación de dicho acuerdo en los siguientes términos:

Primero: Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de febrero de 2009 que se transcribe íntegramente:

“Visto el convenio normalizado de adhesión de este Ayuntamiento al sistema de Adquisición centralizado de la Excm. Diputación Provincial de Valencia, Central de Compras de la Diputación de Valencia (Central) remitido por la Diputación Provincial de Valencia.

Considerando conveniente la aprobación del mismo por este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero: La aprobación del Convenio normalizado de adhesión de este Ayuntamiento al sistema de Adquisición centralizado de la Excm. Diputación Provincial de Valencia, Central de Compras de la Diputación de Valencia (Central) que se une como anexo.



AYUNTAMIENTO DE RIBARROJA DEL TURIA

Pz. Ayuntamiento, 9 C.P.: 46190 Tfno.: 96 277 00 62 Fax: 96 277 24 62 C.I.F.: P-4621600-H www.ayto-ribarroja.es

SECRETARÍA

Segundo: Facultar al Sr. Alcalde lo mas ampliamente en derecho a que diera lugar para la firma del mismo.

Tercero: Que se eleve dicho acuerdo al próximo Pleno para que proceda a su ratificación.

Cuarto: Notificar dicho acuerdo a la Exma Diputación de Valencia a los efectos oportunos”.

El Pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros y con el voto favorable de los Sres/as, Silvestre, Moreno, Vázquez, Ruiz, Rodríguez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña del PP y Sr. Alcalde y con la abstención de los Sres/as, Raga, López, Rosa, Hernández y Guerrero PSOE y la Sra Folgado de *EUPV-BLOC VERDS-IR ACORD* acordó ratificar dicho acuerdo.

Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr Presidente levanta la sesión siendo las 15:00 horas de lo que yo la Secretaria certifico.



AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TURIA

Pz. Ayuntamiento, 9 C.P.: 46190 Tfno.: 96 277 00 62 Fax: 96 277 24 62 C.I.F.: P-4621600-H www.ayto-ribarroja.es

SECRETARÍA

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA ORDINÀRIA CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT PLE
EL DIA 25 DE FEBRER DEL 2009

Lloc: Saló d'ACTES DE L'AGÈNCIA DESENVOLUPAMENT LOCAL

Data: 25 DE FEBRER DEL 2009.

Hora: 14:30

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: extraordinària

Assistents:

ALCALDE-PRESIDENT

EL SENYOR FRANCISCO TARAZONA ZARAGOZÁ

REGIDORS ASSISTENTS:

El senyor SALVADOR SILVESTRE LARREA
El senyor JAVIER MORENO COLL
La senyora MARÍA CRISTINA VÁZQUEZ TARAZONA
La senyora MARÍA JOSE RUIZ ESTEBAN
La senyora MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ ROMERO.
El senyor JOSE VICENTE TARAZONA CAMPOS
La senyora BEÁTRIZ CÓRCOLES NAVARRO
El senyor JOSE LUIS FOLGADO CORREA
La senyora RAQUEL ARGÁNDOÑA LOPEZ
El senyor ROBERTO PASCUAL RAGA GADEA
La senyora ZAFIRA PEREZ PACHECO
El senyor JOSE LUIS LÓPEZ GALDON
La senyora MARÍA ANGELES ROSA ROMERO
El senyor JOSE ANGEL HERNÁNDEZ CARRIZOSA.
La senyora CARMEN FOLGADO TERESÍ

Regidors/absents:

La senyora SILVIA GUERRERO CANOVAS

Secretària

La Senyora Nieves Barrachina Lemos.



AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TURIA

Pz.Ayuntamiento, 9 C.P.: 46190 Tfno.: 96 277 00 62 Fax: 96 277 24 62 C.I.F.: P-4621600-H www.ayto-ribarroja.es

SECRETARÍA

En la vila de Riba-roja de Túria, província de València, en el Saló d'Actes de L'Agència Desenvolupament Local, el dia 25 de febrer del 2009, sent les 14:30 hores, es van reunir en primera convocatòria els senyors regidors indicats, havent-hi excusat la seua assistència els igualment marginats, Tot això davall la Presidència del Sr. Alcalde el senyor Francisco Tarazona Zaragoza, assistit de la Secretària senyora Nieves Barrachina Lemos.

Declarat obert l'acte per la presidència, es passa a l'estudi i acord dels assumptes consignats en l'Orde del Dia.

PRIMER: - ACORD RELATIU A LA RENÚNCIA SOL-LICITADA PER SRA ZAFIRA PEREZ PACHECO PERTANYENT AL PSPV-PSOE.-

Donat compte de l'escrit presentat per la Regidora del PSPV-PSOE, SRA ZAFIRA PEREZ PACHECO, presentat en data 2 de febrer del 2009, en el que comunica la seua decisió de renunciar a la seua acta de Regidor del PSPV-PSOE de l'Ajuntament de Riba-roja del Túria.

Considerant el que estableix l'art. 9, ap. 4 del RD 2568/1986 de 28 de novembre que aprova el Reglament d'Organització Funcionament i règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) en el que assenyala les causes per les quals un regidor perd la seua condició, i entre les que es troba la renúncia.

Considerant que en tal supòsit el Ple de l'Ajuntament ha d'acordar l'acceptació de la renúncia i instar a la Junta Electoral l'expedició de credencial al següent de la llista.

Considerant que segons l'article 182 de la LOREG, Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny de Règim Electoral General en cas de renúncia l'escó s'atribuirà al candidat o si és el cas al suplent de la mateixa llista a qui corresponga, atenent a la seua orde de col·locació.

El Ple per unanimitat de tots els membres assistents que conformen la majoria absoluta del número legal de membres, acorda:

PRIMER: Acceptar la renúncia de la Regidora SRA Zafira Pérez Pacheco de la llista del PSPV-PSOE.

SEGON: Sol·licitar de la Junta Electoral Central l'expedició de credencial a favor de la senyora ANA LUJAN TARIN, següent de la llista corresponent al PSPV-PSOE atenent a la seua orde de col·locació, a fi de prendre possessió en la primera sessió que celebre el ple una vegada remesa per eixa Junta la referida credencial.

SEGON.- ACORD RELATIU A L'APROVACIÓ CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA PER AL



AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TURIA

Pz.Ayuntamiento, 9 C.P.: 46190 Tfno.: 96 277 00 62 Fax: 96 277 24 62 C.I.F.: P-4621600-H www.ayto-ribarroja.es

SECRETARÍA

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “SONA LA DIPU, VALÈNCIA PROVÍNCIA WIFI” EN EL MARC DE LA COL-LABORACIÓ I COOPERACIÓ PROVINCIAL AMB LES ENTITATS LOCALS DE LA PROVÍNCIA.-

La societat de la informació, el procés de modernització de les Administracions Públiques així com el dret d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics consagrat i articulat en la Llei 11/2007, de 22 de juny, exigixen amb data caducitat (31 de desembre del 2009), que aquelles es doten dels mitjans i sistemes electrònics perquè eixos drets puguen fer-se efectius. Ara bé, el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics i la correlativa obligació d'estes de facilitar-los, esdevindrà inútil si les els poders públics no impulsen la instal·lació, i gestionen l'ús, de les infraestructures indispensables perquè els potencials usuaris – ciutadans, entitats i empreses - puguen accedir a eixos servicis que, per via telemàtica, els oferisquen els operadors privats o les pròpies Administracions Públiques.

Posar en mans dels ciutadans els mitjans tècnics adequats que facen possible i agilitzen, sense perjudici de les actuacions que a la iniciativa privada li corresponen i que en molts casos ve ja desenvolupant, el seu accés als canals per què han de transitar per a exercitar els seus drets és, sens dubte, una actuació que entra en l'àmbit de les capacitats que la legislació assigna als ens locals. Des d'este prisma el subministrament, instal·lació, manteniment i explotació de Xarxes Digitals Municipals basades en tecnologia sense fil (Xarxa Digital Municipal, Zones Digitals Municipals i Edificis Digitals) en els municipis de la província fins a formar una verdadera Xarxa Digital Provincial, suposa un important pas avant.

És en este context on la Diputació Provincial exercint, les seues competències de cooperació, assistència i col·laboració amb els municipis per a la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i comunicació, i en compliment de la Disposició Final Tercera de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics, va plantejar el Programa “Sona La Dipu, València Província Wifi”, a què es van adherir inicialment la majoria dels municipis de la província i, per acord plenari de 21 de gener de 2009, va donar llum verd a les Directrius que regiran la col·laboració i cooperació provincial amb les entitats locals de la província per al desenvolupament de tal Programa i el seu Conveni regulador.

L'Exposició de Motius de la Llei General de Telecomunicacions (Llei 32/2003, de 3 de novembre) declara que la regulació de les comunicacions electròniques s'inspirarà a mantindre el règim de lliure competència alhora que assegura una mínima intervenció de l'Administració en el sector, per a fixar, en l'article 8.4, les pautes de regulació de l'activitat de les Administracions Públiques, per si o per mitjà de persona interposada, com a operadors de xarxes i servicis de comunicació electrònica. L'esmentat article admet expressament la intervenció de les Administracions Públiques en el mercat de les telecomunicacions com un operador més, ja siga de forma directa o indirecta a través d'empreses públiques (en el seu sentit més lat).

D'altra banda, la Llei Reguladora de les Bases del Règim local assenyala en l'article 25 que, *“el municipi per a la gestió dels seus interessos i en l'esfera de les seues competències pot promoure qualsevol classe d'activitats i prestar tots els servicis públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal”*, per a afegir en l'article 85 que *“són servicis públics locals els que presten les entitats locals en l'àmbit de les seues competències”* i,



AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TURIA

Pz.Ayuntamiento, 9 C.P.: 46190 Tfno.: 96 277 00 62 Fax: 96 277 24 62 C.I.F.: P-4621600-H www.ayto-ribarroja.es

SECRETARÍA

establir en l'article 70,bis, apartat tercer, *“els municipis hauran d'impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per a facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per a la presentació de documents i per a la realització de tràmits administratius, d'enquestes i, si és el cas, de consultes ciutadanes”*.

De l'anterior, fàcilment es dedueix l'interés municipal i el benefici que per a la comunitat veïnal suposa la implantació de servicis que, amb vocació d'universalitat, subministren des del punt de vista econòmic i tècnic, l'accés i la normal utilització dels canals tecnològicament més avançats. I això encara considerant que la prestació de servicis de comunicacions electròniques per les Administracions Públiques constituïx un “servici d'interés general”, una activitat liberalitzada i no un “servici de titularitat pública” o un “servici públic” en el sentit clàssic del terme. Evidentment una Administració Pública, en este cas l'Ajuntament, directament o a través d'un tercer, però també coordinadament amb altres Administracions Públiques i molt especialment a través de la Diputació (donades les seues competències amb vista a la col·laboració, assistència, coordinació i cooperació amb les entitats locals de la província), pot intervindre en el mercat de les telecomunicacions com un agent més, competint amb la resta dels operadors en l'activitat d'establir i explotar xarxes o prestar servicis de telecomunicacions. En este cas, la seua activitat estarà sotmesa tant a la normativa sectorial de les telecomunicacions com a la resta de la normativa reguladora de la lliure competència que puga ser-li d'aplicació a les activitats exercides.

Afegir a més que millorar la cohesió territorial i agilitzar l'eliminació dels obstacles que produïxen deficiències, quan no carències, en infraestructures de comunicacions que poden desembocar en una bretxa digital (amb la consegüent fallida d'oportunitats per a ciutadans i entitats i el foment de desigualtats inacceptables) han de ser objectius estratègics de les Administracions Públiques, i així es proclama, amb la Diputació Provincial de València, en l'anteriorment esmentat acord plenari de 21 de gener de 2.009. Per això, si la legislació vigent establix, com fa, que la Província té com a fins propis i específics garantir els principis de solidaritat i equilibri intermunicipals en el marc de la política econòmica i social, el govern i l'administració provincial de forma coordinada amb els governs dels ens locals del seu territori, ha de fomentar el més complet compliment d'estos fins, dotant als ens locals de la província dels adequats mecanismes de relació electrònics amb els ciutadans i implantar les infraestructures de comunicacions que els permeten, la més eficaç comunicació amb les diferents Administracions Públiques. El Programa que ens ocupa aborda de ple estos objectius estratègics; objectius de què participa plenament este Ajuntament.

El desplegament de Xarxes Digitals Municipals basades en tecnologia sense fil, fins a formar una Xarxa Sense fil Provincial, es presenta d'esta manera, com una de les accions més potents en el compliment dels objectius de cohesió territorial en la província i al temps, com s'ha apuntat, evitar l'anomenada bretxa digital. En este sentit este Ajuntament pretén formar part de la Xarxa Digital Provincial dissenyada per la Diputació.

De la mateixa forma, la implementació i desenvolupament d'una Xarxa Wifi (entesa en la seua més àmplia accepció) en cada un dels municipis de la província, significa assumir dins de la competència local una activitat econòmica que empara un servici d'interés general - així ho considera l'article 2 de la Llei General de Telecomunicacions - encara que de caràcter no



AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TURIA

Pz.Ayuntamiento, 9 C.P.: 46190 Tfno.: 96 277 00 62 Fax: 96 277 24 62 C.I.F.: P-4621600-H www.ayto-ribarroja.es

SECRETARÍA

essencial, entés com a activitat exercida per l'Ajuntament que no impedis la seua realització per empreses privades, per quant les entitats locals, com ja s'ha expressat, *“hauran d'impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per a facilitar la participació i la comunicació amb els veïns”*.

Però, a més, i en la fase d'explotació de les infraestructures instal·lades o que instal·le qui es constituïska en operador gestionant el servici atorgat per l'Administració, suposa, en sentit estricte, l'exercici d'una activitat econòmica per part dels ens locals que, com ja s'ha anticipat, entra plenament dins de l'àmbit de les seues capacitats i queda emparada constitucionalment en els articles 9 (*“promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups que la integren, siga real i efectiva”*) i 128 (que possibilita la intervenció de les Administracions Públiques en concurrència amb la iniciativa privada en la dació de béns al mercat). Eixa activitat es pretén siga exercida per delegació dels ens locals titulars de la capacitat i competència, per part de la Diputació Provincial – una vegada acceptada la delegació que li facen els Ajuntaments –. L'activitat a desenvolupar per la corporació provincial ho és, en exercici del genèric deure de cooperació, assistència i col·laboració que s'assigna a les Diputacions Provincials, i el més concret de col·laboració amb els municipis que *“per la seua insuficient capacitat econòmica i de gestió no puguen desenvolupar en grau suficient l'impuls de la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i de la comunicació”* a les que es referix l'article 70 bis de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

És en l'exercici, per la Diputació Provincial, d'una activitat suportada en un servici d'interés general per part de les Administracions Públiques – en concret per part de la Diputació Provincial per delegació dels respectius Ajuntaments – on ha de residenciar-se l'actuació que la província pretén portar a terme.

Com ja s'ha avançat, prestar un servici de comunicacions electròniques per part de les entitats locals (Administracions Públiques) és plenament d'acord amb l'ordenament jurídic vigent tant si és promovent el desenvolupament del sector de les telecomunicacions, com la utilització de nous servicis i desplegament de xarxes, l'accés a estos en condicions d'igualtat, i impulsant la cohesió territorial, econòmica i social, on estes no existixen o són indiscutiblement insuficients, com en els supòsits en què una concreta entitat pública (en el present cas una entitat local) decidisca prestar el servici en zones on ja s'està prestant per operadors privats, en concurrència amb estos. En este últim cas caldrà ajustar-se actuant com un operador més i esta actuació, des del punt de vista de la Llei General de Telecomunicacions, esdevindrà d'interés general per vindre emparada (article 4) per indicadors com ara propiciar l'increment d'ofertes, promoure la inversió eficient en noves tecnologies, fomentar la innovació tecnològica i en definitiva, impulsar beneficis per als ciutadans derivats del règim de lliure competència.

Entesa en la forma ressenyada l'activitat a desenvolupar pels respectius ajuntaments (activitat per a la prestació d'un servici d'interés general) res els impedis que s'adherisquen al Programa *“Sona la Dipu, València Província Wifi”*, i assumir com propi el subministrament, posada en funcionament, explotació i manteniment de les infraestructures i servicis per mitjà de Xarxes Sense fil per a l'accés dels ciutadans i entitats municipals als servicis de la societat de la informació i, al mateix temps delegar l'exercici d'esta activitat, assumida basant-se en les capacitats que els atorga l'article 25 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i la pròpia Llei General de Telecomunicacions en l'article 8.4, en la Diputació Provincial.



AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TURIA

Pz.Ayuntamiento, 9 C.P.: 46190 Tfno.: 96 277 00 62 Fax: 96 277 24 62 C.I.F.: P-4621600-H www.ayto-ribarroja.es

SECRETARÍA

La delegació municipal (per a oferir estos servicis d'interés general al mercat) té perfecta randa en la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local. Si l'article 31 de l'esmentat text legal assenyala *“que són fins propis i específics de la província garantir els principis de solidaritat i equilibri intermunicipals en el marc de la política econòmica i social i, en particular: a) garantir la prestació integral i adequada en la totalitat del territori provincial dels servicis de la competència provincial”*, l'article 70, bis, apartat tercer, després d'afirmar que els *“municipis hauran d'impulsar la utilització interactiva les tecnologies de la informació i la comunicació”* determina que *“les Diputacions Provincials col·laboraran amb els municipis que, per la seua insuficient capacitat econòmica i de gestió, no puguen desenvolupar en grau suficient el deure establert en este apartat”*.

Però és més, entre les finalitats de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics figura la de *“facilitar l'accés per mitjans electrònics dels ciutadans a la informació”*, i la més genèrica de *“contribuir al desenvolupament de la societat de la informació en l'àmbit de les Administracions Públiques i de la societat en general”*, finalitats de molt difícil compliment si no es desenvolupen i potencien els llits perquè els ciutadans puguen accedir de forma còmoda i segura als servicis que les administracions locals hagen implementat en desplegament dels principis establerts en la legislació vigent.

Entenent que, la transferència d'activitats i servicis a altres Administracions Públiques, l'aprovació de la concreta forma de gestió d'un servici públic – en este cas la prestació d'un *“servici d'interés general”* que haurà de ser oferit en el mercat en concurrència amb els altres actors -, la delegació de competències i la seua acceptació correspon al ple de l'entitat local, i que per a portar a terme esta transferència es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la corporació com s'inferix dels articles 22 i 47 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

Entenent igualment que, per a concretar les obligacions i drets que els Ajuntaments adquirixen i suporten amb la delegació, i la delegació mateixa i fer efectiva la cooperació provincial amb els municipis, entre els previstos en l'article 30,5 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, el Conveni Administratiu, és l'instrument idoni.

Vistos els acords provincials i la documentació que els suporta i en especial les Directrius per a la col·laboració i cooperació provincial amb les entitats locals de la província per al desenvolupament del programa provincial *“Sona La Dipu, València Província Wifi”*, i el Model de Conveni entre la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament per al desenvolupament del Projecte Provincial en el marc de la col·laboració i cooperació provincial amb les entitats locals de la província”.

Vista la proposta de la Regidoria i Tècnic de l'Àrea d'Organització, Sistemes d'Informació i Comunicacions i l'Informe de la Secretària de l'Ajuntament de data 18 de febrer del 2009 que formen part de l'expedient.

El Ple per unanimitat de tots els membres assistents que conformen la majoria absoluta del número legal de membres, acorda:



AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TURIA

Pz.Ayuntamiento, 9 C.P.: 46190 Tfno.: 96 277 00 62 Fax: 96 277 24 62 C.I.F.: P-4621600-H www.ayto-ribarroja.es

SECRETARÍA

Primer: Adherir-se al Programa Provincial “Sona La Dipu, València Província Wifi” en els termes fixats per les Directrius que regixen la col·laboració i cooperació provincial amb les entitats locals de la província per al seu desenvolupament. Assumint com pròpia la competència per a executar les actuacions necessàries per a implementar les accions en què es concreta esta col·laboració i cooperació provincial del Programa Provincial “Sona la Dipu, València Província Wifi”, i delegant en la Diputació Provincial de València, en el marc de la cooperació i col·laboració amb els Ajuntaments de la província que li són propis i en els termes previstos en les Directrius Provincials i el corresponent Conveni Administratiu, l'exercici d'esta competència per al subministrament, instal·lació, manteniment i explotació d'una Xarxa Digital Municipal en basada en tecnologia sense fil en el municipi i la prestació de l'activitat municipal que s'assumix – prestació d'un servici d'interés general -.

Segon: Aprovar el Conveni Administratiu que, com a part del present acord, degudament diligenciat obra en l'expedient.

Tercer: Autoritzar a l'alcalde-president tan àmpliament com en Dret procedisca, per a la firma de l'esmentat Conveni Administratiu amb la Diputació Provincial i de tots els documents siguen precisos que per a l'efectivitat dels drets i obligacions que es deriven del present acord.

Quart: L'efectivitat de drets i obligacions que es desprenen dels acords anteriors ho serà des de la firma per part d'este Ajuntament i la Diputació Provincial de València del Conveni Administratiu a què s'ha fet referència.

TERCER.- ACORD RELATIU A LA RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONVENI NORMALITZAT D'ADHESIÓ D'ESTE AJUNTAMENT AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZAT DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE COMPRES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA (CENTRAL) QUE S'UNIX COM ANNEX.-

El Sr. Alcalde dóna lectura a la Moció que diu el següent:

Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 16 de febrer del 2009 relatiu a l'aprovació del Conveni normalitzat d'adhesió de l'Ajuntament de Riba-roja del Túria al sistema d'adquisició centralitzat de l'Excma. Diputació Provincial de València, Central de Compres de la Diputació de València (Central) remés per la Diputació Provincial de València, se sotmet al Ple de la Corporació la ratificació de tal acord en els termes següents:

Primer: Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 16 de febrer del 2009 que es transcriu íntegrament:

“Vist el conveni normalitzat d'adhesió d'este Ajuntament al sistema d'Adquisició centralitzat de l'Excma. Diputació Provincial de València, Central de Compres de la Diputació de València (Central) remés per la Diputació Provincial de València.

Considerant convenient l'aprovació del mateix per este Ajuntament.

La Junta de Govern Local en votació ordinària i per unanimitat, acorda:



AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TURIA

Pz.Ayuntamiento, 9 C.P.: 46190 Tfno.: 96 277 00 62 Fax: 96 277 24 62 C.I.F.: P-4621600-H www.ayto-ribarroja.es

SECRETARÍA

Primer: L'aprovació del Conveni normalitzat d'adhesió d'este Ajuntament al sistema d'Adquisició centralitzat de l'Excm. Diputació Provincial de València, Central de Compres de la Diputació de València (Central) que s'unix com annex.

Segon: Facultar al Sr. Alcalde el mes àmpliament en dret a què donara lloc per a la firma del mateix.

Tercer: Que s'eleve tal acord al pròxim Ple perquè procedisca a la seua ratificació.

Quart: Notificar tal acord a l'Exma Diputació de València als efectes oportuns".

El Ple per majoria absoluta del número legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/es, Silvestre, Moreno, Vázquez, Ruiz, Rodríguez, Tarazona, Córcoles, Folgado, Argandoña del PP i Sr. Alcalde i amb l'abstenció dels Srs/es, Raga, López, Rosa, Hernández i Guerrero PSOE i la Sra Folgado d'EUPV-BLOC *VERD ACORD* va acordar ratificar tal acord.

I no havent-hi més assumptes que tractar pel Sr President alça la sessió sent les 15:00 hores del que jo la Secretària certifique.